



Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

**CÓDIGO DE CONDUCTA
SOBRE LOS ASPECTOS POLÍTICO-MILITARES
DE LA SEGURIDAD**

3 de diciembre de 1994

Serie del Programa de Acción Inmediata, N° 7

Nota: El presente documento se aprobó en la 91ª Sesión Plenaria del Comité Especial del Foro de la CSCE de Cooperación en materia de Seguridad celebrada en Budapest el 3 de diciembre de 1994 (véase FSC/Diario N° 94).

DOC.FSC/1/95
3 de diciembre de 1994
ESPAÑOL
Original: INGLÉS
Versión corregida del 21 de diciembre de 1994

CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE LOS ASPECTOS POLÍTICO-MILITARES DE LA SEGURIDAD

PREÁMBULO

Los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE),

Reconociendo la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, entre otras formas, mediante la promoción de normas de conducta responsable y cooperativa en la esfera de la seguridad,

Confirmando que no hay nada en el presente Código que menoscabe la validez y aplicabilidad de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas o de otras disposiciones del derecho internacional,

Reafirmando la plena validez de los principios rectores y de los valores comunes del Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Documento de Helsinki 1992, expresión de las responsabilidades de los Estados entre sí y de los gobiernos hacia sus pueblos, así como la validez de otros compromisos de la CSCE,

Han adoptado el siguiente Código de Conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad:

I

1. Los Estados participantes ponen de relieve que el pleno respeto de todos los principios de la CSCE incorporados en el Acta Final de Helsinki y la aplicación de buena fe de todos los compromisos adquiridos en la CSCE tienen importancia fundamental para la estabilidad y la seguridad, y que por consiguiente constituyen una cuestión de interés directo y legítimo para todos ellos.
2. Los Estados participantes confirman la validez continua de su concepto integral de la seguridad, iniciado en el Acta Final, que relaciona el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, vincula la cooperación en materia de economía y medio ambiente con las relaciones pacíficas entre los Estados.
3. Siguen convencidos de que la seguridad es indivisible y de que la seguridad de cada uno de ellos está indisolublemente vinculada a la seguridad de todos los demás. No reforzarán su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados. Promoverán sus propios intereses en materia de seguridad de conformidad con el esfuerzo común para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región de la CSCE y más allá de la misma.
4. Reafirmando su respeto a la igualdad soberana y la individualidad de cada uno de ellos, así como a los derechos inherentes a su soberanía y por ella abarcados, los Estados participantes basarán sus relaciones mutuas en materia de seguridad en un enfoque de cooperación. Resaltan a este respecto la función clave de la CSCE. Continuarán desarrollando instituciones complementarias y reforzadas mutuamente, con inclusión de organizaciones europeas y transatlánticas, iniciativas bilaterales y multilaterales y diversas formas de cooperación regional y

subregional. Los Estados participantes cooperarán para garantizar que todos estos arreglos en materia de seguridad estén armonizados con los principios de la CSCE y con los compromisos establecidos en este Código.

5. Están decididos a actuar de forma solidaria si se violan las normas y compromisos de la CSCE, y a facilitar respuestas concertadas a los desafíos contra la seguridad con que puedan enfrentarse como resultado de ello. Cuando un Estado participante pida asistencia para realizar su autodefensa individual o colectiva, los países participantes celebrarán consultas con prontitud, de conformidad con sus responsabilidades ante la CSCE. Examinarán conjuntamente la naturaleza de la amenaza y las medidas que puedan requerirse en defensa de sus valores comunes.

II

6. Los Estados participantes no apoyarán de ningún modo las actividades terroristas y adoptarán medidas adecuadas para evitar y combatir el terrorismo en todas sus formas. Cooperarán plenamente para combatir la amenaza de actividades terroristas mediante la aplicación de instrumentos y compromisos internacionales que convengan a este respecto. En especial, adoptarán medidas para cumplir los requisitos de los acuerdos internacionales en virtud de los cuales se obligan a procesar a los terroristas o a conceder su extradición.

III

7. Los Estados participantes recuerdan que los principios del Acta Final de Helsinki tienen importancia primordial y que, en consecuencia, se aplicarán por igual y sin reservas, y que cada uno de ellos se interpretará en relación con los demás.

8. Los Estados participantes no prestarán asistencia o apoyo a los Estados que violen su obligación de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración sobre los Principios que Rigen las Relaciones entre los Estados Participantes contenida en el Acta Final de Helsinki.

IV

9. Los Estados participantes reafirman el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.

10. Cada Estado participante, teniendo en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de otros Estados, podrá determinar libremente por sí mismo sus intereses en materia de seguridad sobre la base de la igualdad soberana, y tendrá el derecho a elegir libremente sus propios arreglos en materia de seguridad, de conformidad con el derecho internacional y con los compromisos relativos a los principios y objetivos de la CSCE.

11. Los Estados participantes tienen el derecho soberano de pertenecer o no a organizaciones internacionales, y de ser o no parte en tratados bilaterales o multilaterales, incluidos los tratados de alianza; asimismo, tienen derecho a la neutralidad. Cada Estado tiene el derecho de modificar su condición a este respecto, sujeto a los acuerdos y procedimientos pertinentes. Cada Estado respetará los derechos de todos los demás a este respecto.

12. Cada Estado participante sólo mantendrá una capacidad militar proporcional a las necesidades legítimas de seguridad comunes o individuales, tomando en consideración sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

13. Cada Estado participante determinará sus capacidades militares sobre la base de los procedimientos democráticos nacionales, teniendo en cuenta las preocupaciones legítimas de otros Estados en materia de seguridad, así como la necesidad de contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales. Ningún Estado participante intentará imponer una dominación militar sobre otro Estado participante.

14. Un Estado participante podrá estacionar sus fuerzas armadas en el territorio de otro Estado participante de conformidad con un acuerdo libremente negociado entre ellos así como de conformidad con el derecho internacional.

V

15. Los Estados participantes aplicarán de buena fe todos y cada uno de sus compromisos en la esfera del control de armamentos, el desarme y el fomento de la confianza y la seguridad, como elemento importante de su seguridad indivisible.

16. Con vistas a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región de la CSCE, los Estados participantes reafirman su compromiso de promover el control de los armamentos, el desarme y las medidas de fomento de la confianza y la seguridad.

VI

17. Los Estados participantes se comprometen a cooperar, inclusive mediante el establecimiento de condiciones económicas y ambientales adecuadas, para contrarrestar las tensiones que puedan provocar conflictos. El origen de estas tensiones yace en violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales así como de otros compromisos en la dimensión humana; las manifestaciones de nacionalismo agresivo, racismo, chovinismo, xenofobia y antisemitismo también pueden poner en peligro la paz y la seguridad.

18. Los Estados participantes resaltan la importancia tanto de la pronta identificación de conflictos potenciales como de sus esfuerzos conjuntos en la esfera de prevención de conflictos, gestión de crisis y arreglo pacífico de controversias.

19. En caso de conflicto armado, los Estados participantes tratarán de facilitar el cese efectivo de hostilidades y de crear condiciones que favorezcan la solución política del conflicto. Cooperarán en apoyo de la ayuda humanitaria dirigida a mitigar el sufrimiento de la población civil, inclusive facilitando el movimiento de personal y de recursos dedicados a dichas tareas.

VII

20. Los Estados participantes consideran que el control político democrático de las fuerzas militares, paramilitares y de seguridad interna, así como de los servicios de información y de la policía, es un elemento indispensable de estabilidad y seguridad. Fomentarán la integración de sus fuerzas armadas en la sociedad civil como una importante expresión de democracia.

21. Cada Estado participante establecerá y mantendrá en todo momento la dirección eficaz y el control de sus fuerzas militares, paramilitares y de seguridad por autoridades establecidas de

acuerdo a la constitución, investidas de legitimidad democrática. Cada Estado participante establecerá controles para velar por que esas autoridades cumplan con sus responsabilidades constitucionales y legales. Los Estados participantes definirán claramente las funciones y las misiones de esas fuerzas y su obligación de actuar únicamente dentro del marco constitucional.

22. Cada Estado participante velará por que sus gastos de defensa sean aprobados por su poder legislativo. Cada Estado participante, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de seguridad nacional, moderará sus gastos militares y velará por la transparencia y el público acceso a la información relacionada con las fuerzas armadas.

23. Cada Estado participante, aun atendiendo al ejercicio de los derechos civiles de los miembros de sus fuerzas armadas, velará por que éstas, como tales, sean políticamente neutrales.

24. Cada Estado participante adoptará y mantendrá medidas para impedir la utilización accidental o no autorizada de medios militares.

25. Los Estados participantes no tolerarán ni apoyarán fuerzas no sometidas ni controladas por las autoridades establecidas constitucionalmente. Si un Estado participante no puede ejercer su autoridad sobre tales fuerzas, podrá iniciar consultas en el marco de la CSCE para examinar las medidas que deban adoptarse.

26. Cada Estado participante garantizará que, de conformidad con sus compromisos internacionales, sus fuerzas paramilitares no adquirirán una capacidad para realizar misiones de combate que sea superior a aquélla para la que fueron establecidas.

27. Cada Estado participante garantizará que el reclutamiento o la llamada a filas de personas para que presten servicio en sus fuerzas militares, paramilitares y de seguridad sea compatible con sus obligaciones y compromisos con respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

28. Los Estados participantes recogerán en sus leyes u otros documentos pertinentes los derechos y deberes del personal de sus fuerzas armadas. Considerarán la posibilidad de establecer exenciones o alternativas al servicio militar.

29. Los Estados participantes difundirán ampliamente en sus respectivos países el derecho humanitario internacional aplicable en caso de guerra. Recogerán en sus programas y reglamentos de enseñanza militar sus compromisos en esta esfera, de conformidad con la práctica nacional.

30. Cada Estado participante instruirá a sus fuerzas armadas sobre el derecho humanitario internacional, convenios y compromisos humanitarios internacionales que regulan los conflictos armados, y velará por que esas personas tengan conciencia de que, en virtud del derecho nacional e internacional, son responsables individualmente de sus actos.

31. Los Estados participantes velarán por que el personal de sus fuerzas armadas investido de mando ejerza su autoridad de conformidad con el derecho nacional e internacional pertinente y sepa que puede ser considerado personalmente responsable, en aplicación del mencionado derecho, del ejercicio ilícito de dicha autoridad, y que no debe dar órdenes contrarias al derecho nacional e internacional. La responsabilidad de los superiores no exime a los subordinados de ninguna de sus responsabilidades individuales.

32. Cada Estado participante velará por que el personal que sirva en sus fuerzas militares, paramilitares y de seguridad pueda disfrutar y ejercer sus derechos humanos y libertades

fundamentales recogidos en los documentos de la CSCE y el derecho internacional, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes y con las necesidades del servicio.

33. Cada Estado participante establecerá procedimientos jurídicos y administrativos apropiados para proteger los derechos de todo el personal de sus fuerzas armadas.

VIII

34. Cada Estado participante velará por que sus fuerzas armadas estén, en la paz y en la guerra, mandadas, dotadas, adiestradas y equipadas de forma compatible con las disposiciones del derecho internacional y sus obligaciones y compromisos respectivos relativos a la utilización de las fuerzas armadas en los conflictos armados, incluidos, según proceda, los Convenios de La Haya de 1907 y 1954, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como la Convención de 1980 sobre la Utilización de Ciertas Armas Convencionales.

35. Cada Estado participante velará por que su política y doctrina de defensa corresponda al derecho internacional relativo a la utilización de las fuerzas armadas, inclusive en los conflictos armados, y a los compromisos pertinentes del presente Código.

36. Cada Estado participante velará por que toda decisión de destinar sus fuerzas armadas a misiones de seguridad interna se adopte de conformidad con procedimientos constitucionales. Esas decisiones prescribirán las misiones de las fuerzas armadas, garantizando que se realicen bajo el control efectivo de las autoridades constitucionalmente establecidas y con sujeción al estado de derecho. Si en la realización de sus misiones de seguridad interna no se puede impedir el recurso a la fuerza, cada Estado participante velará por que ésta se utilice en la medida necesaria para el cumplimiento de la ley. Las fuerzas armadas harán lo posible por evitar que se causen daños a las personas civiles o sus bienes.

37. Los Estados participantes no utilizarán las fuerzas armadas para restringir el ejercicio pacífico y legal de los derechos humanos y civiles de las personas, consideradas individualmente o como representantes de grupos, ni para despojarlas de su identidad nacional, religiosa, cultural, lingüística o étnica.

IX

38. Cada Estado participante es responsable de la aplicación del presente Código. Si se le pide, un Estado participante dará explicaciones adecuadas con respecto a su aplicación del Código. Se utilizarán los órganos, mecanismos y procedimientos adecuados de la CSCE para evaluar, examinar y, en caso necesario, mejorar la aplicación del presente Código.

X

39. Las disposiciones adoptadas en el presente Código de Conducta son políticamente vinculantes. En consecuencia, el presente Código no podrá registrarse con arreglo al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El presente Código entrará en vigor el 1 de enero de 1995.

40. Nada de lo dispuesto en el presente Código alterará la naturaleza y el contenido de los compromisos establecidos en otros documentos de la CSCE.

41. Los Estados participantes tratarán de garantizar que sus pertinentes documentos y procedimientos internos, o sus instrumentos jurídicos cuando proceda, recojan los compromisos adquiridos en virtud del presente Código.

42. El texto del presente Código se publicará en cada Estado participante, que lo difundirá y dará a conocer con la mayor amplitud posible.

Para obtener más información sobre la
Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa y sus actividades:

Secretaría de la OSCE
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Viena (Austria)
Teléfono: (+431) 514 36-0
Telefax: (+431) 514 36-99
Dirección correo electrónico INTERNET:
pm-dab@osce.org.at

Para obtener más ejemplares del presente
documento o de otros títulos publicados
por la OSCE:

Oficina de Praga de la Secretaría de la OSCE
Rytířská 31
CZ-110 00 Praga 1 (República Checa)
Teléfono: (+422) 216 10-217
Telefax: (+422) 2422 38 83 ó 2423 05 66
Dirección correo electrónico INTERNET:
osceprag@ms.anet.cz